

diría posteriormente Pilar Brabo, que pidió al Consell una política consensual.

Las primeras intervenciones del socialista Albiñana se están caracterizando por una eficacia que busca unir los sectores ciudadanos escindidos por cuestiones de banderas y nombres de lenguas. De he-

cho, la consecución de la autonomía dependerá de cómo actúen los consellers y su presidente con un gobierno de concentración, mayoritariamente de izquierdas y con un presidente miembro del partido que se presenta frente a UCD como alternativa de poder. ■ JAIME MILLAS. Foto: EL CAMERAMAN.

Castilla-León

UN REGIONALISMO CONFUSO

El domingo 23 de abril se espera que acudan a Villalar de los Comuneros para celebrar el Día de la Región castellano-leonesa más de cien mil personas.

A SOCIACIONES regionalistas y partidos organizadores pretenden de algún modo arrebatarse ese carácter de fiesta comunitaria para encauzar el Villalar 78 hacia la consecución de la preautonomía.

La elaboración del anteproyecto de régimen de preautonomía para Castilla y León ha sido dificultosa. Consejo General y Junta de Consejeros serán los órganos legislativo y ejecutivo, respectivamente, pero en la última reunión con el ministro para las Regiones, todavía quedaron pendientes de solución las atribuciones de la Junta y la participación de las actuales diputaciones en la misma.

La integración de las distintas provincias en la unidad regional ha supuesto un problema de primer orden. Por voluntad unánime de sus parlamentarios se han integrado en Castilla-León: Avila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid. Soria y Zamora lo han hecho con la excepción de sus señorías Carazo y Silva Muñoz derechista "independiente" y AP, respectivamente.

Santander, Logroño y León han quedado provisionalmente al margen de este régimen preautonómico, que formalmente deja las puertas abiertas para su integración respetando sus peculiaridades. Unión de Centro Democrático, y en sus filas bastantes franquistas conversos apresuradamente a la democracia, no ha sabido mantener unos criterios unitarios entre sus parlamentarios. Por ejemplo, en León, Emilio Martín Villa, hermano del ministro del Interior, ha hecho frente común con el oligarca y diputado aliancista Antonio del Valle —cuñado del duque y ex presidente del Gobierno Arias Navarro— en pro de la independencia de León y de Castilla. Con tal designio impul-

san las actividades del GAL (Grupo Autonómico Leonés), y extrañamente tienen como compañeros de viaje a una entidad minoritaria izquierdista, la Asamblea Regional Leonesa.

Comunidad Castellana defiendo furibundamente la separación de la Castilla histórica de León y ha firmado conjuntamente con el GAL un comunicado rechazando la convocatoria del Día de la Región en Villalar. Su cabeza visible es el decano del Colegio de Abogados de Segovia, señor González Herrero. El Instituto Regional Castellano-Leonés, constituido como sociedad anónima el 28 de marzo de 1976, es tenido como una aglomeración regionalista de gentes de izquierdas e independentistas. Los personalismos y la dejadez de los partidos de izquierda una vez legalizados (hoy sólo es apreciable una cierta influencia del Movimiento Comunista de C-L) han impedido que cuajasen las primitivas aspiraciones del IRCL.

Desde el 28 de marzo del presente año es legal el Partido Nacionalista Castellano-Leonés (PANCAL), surgido, con "espíritu democrático e interclasista", puede decirse que de una costilla de la Alianza Regional de Castilla y León, creada a su vez poco antes que el IRCL. Efectivamente, los catedráticos vallisoletanos Martínez Díez y Bravo Lozano son promotores y miembros prominentes de ambas agrupaciones.

El PANCAL cultiva el caldo de un nacionalismo exacerbado, no exento por tanto de recismo, que goza de audiencia no sólo en medios burgueses sino también en círculos de la población emigrante castellano-leonesa.

Así las cosas, la explotación socio-económica de la región castellano-leonesa continúa impertérrita. Sólo dos provincias, y

La pena de muerte: otro aplazamiento



Enrique Tierno Galván: flexibilización en casos especiales.

POR alguna razón el Gobierno ha aplazado una vez más su proyecto de abolición de la pena de muerte, que estaba previsto para el último Consejo de Ministros. Esa razón no puede ser más que la de una presión nueva o más fuerte de los adversarios de la abolición, que vienen ejerciéndola desde hace tiempo. Ya hace meses, el Gobierno rechazó una propuesta socialista en el sentido de la supresión: se la consideró "inoportuna" y se alegó que el Gobierno tenía su propio proyecto. La inoportunidad se refiere a que, en una situación de atentados, hay quienes consideran como antisocial la abolición. Lo que sospecha del Gobierno es que su propuesta es selectiva: es decir, que la mantiene para ciertos delitos. Coincidi-

ría así con la única voz de la oposición de izquierdas en ese sentido, la del profesor Tierno Galván, que es partidario de una flexibilidad "en casos especiales, como, por ejemplo, en delitos determinados en tiempos de guerra". Estas especialidades, estos ejemplos, son siempre arriesgados y plantean injusticias comparativas: puede haber horrendos crímenes civiles que quedarían exentos de la aplicación. Y viceversa, se sabe por la historia con qué excesiva facilidad se aplican en tiempos de guerra o se disculpa en casos "especiales" en los que una tendencia, casi una moda de la sociedad, se ocupa especialmente de ciertos delitos. No parece en cuanto a conciencia y ética, en cuanto a civilización, que pueda mantenerse una posición selectiva en la cuestión de la pena de muerte: o se considera como una barbarie, como una aberración —por razones que se han explicado mil veces— o se la considera necesaria. La selectividad ha existido siempre, y los errores judiciales también.

Con el aplazamiento del proyecto sobre abolición de la pena de muerte se ha producido también el de las medidas llamadas antiterroristas, o de limitación de ciertas libertades públicas y aumento de la capacidad represiva para los delitos relacionados con el terrorismo. Abolición de la pena de muerte y antiterrorismo forman un "paquete" de carácter político. El Gobierno haría aceptar a su derecha, parlamentaria y extraparlamentaria, la abolición (concediendo dentro de ella los "casos especiales"), ofreciéndole en cambio el conjunto de medidas antiterroristas que con tanta insistencia reclaman; al mismo tiempo, presionaría sobre la izquierda en favor de la aceptación de las leyes antiterroristas a cambio de la abolición de la pena de muerte.

El aplazamiento no indica el olvido: parece que es sólo una suspensión para realizar algunas modificaciones en los textos, aceptando así algunas de las presiones ejercidas. En cualquier caso, debería excluirse que los demás temas hermanados se aplicaran por Decreto-Ley o bajo alguna forma que excluyera las discusiones en el Parlamento. Han de ser proyectos que reciban las enmiendas correspondientes y que sean objeto de discusiones y de votación: son demasiado importantes para la convivencia y para la democracia española. Y por la misma razón de su importancia sería de desear que los grupos parlamentarios abandonaran las cuestiones de truce, pacto o consenso para considerarlas en su valor intrínseco: y que se llegara en todos los casos a votaciones nominales. Para que la opinión pública sepa quién es quién en casos que atañen a la base de la democracia.

También parece normal que en el momento actual quedarán en suspenso las penas de muerte que hay en España en diversos momentos de su tramitación. Que nadie sea víctima de un aplazamiento político o de una discusión larga en el Parlamento.

SECUESTRO Y PUÑALADAS A LA VERDAD

LOS periodistas y otros seres humanos estamos satisfechos de la capacidad de información que tiene el mundo moderno. Y, sin embargo, es mucho mayor la capacidad de desinformación. La desinformación no consiste en quitar información, sino en aumentarla más y más, en exagerarla y en dar toda clase de informaciones sobre un mismo hecho de forma que se oscurezca definitivamente. Veamos el caso Cubillo. Le dieron de puñaladas en Argel. Pero, ¿fue cierto o fue fingido? ¿Por el propio Cubillo, por los argelinos? ¿Le hirieron unos españoles?, ¿de los suyos, de los contrarios, de la extrema derecha, del PSOE, de los servicios paralelos? ¿Ajuste de cuentas, relevo en el MPAIAC, argucia contra España, maniobra española contra el Gobierno, maniobra del Gobierno contra Argel? Las informaciones se multiplican, se contradicen. Cada detalle más que se descubre, o que se inventa, o que se deja saber, complica todos los demás. Se ha conseguido un alto nivel de desinformación.

Cada uno quiere la noticia que necesita. Nadie quiere la noticia desnuda y escueta. Cuando la noticia no le gusta, lanza la contranoticia. Algo más importante: el que la inventa se la cree. Todos estamos deseando creernos aquello que nos conforte: que los malos son siempre los otros, que los buenos son siempre buenos. Como en la literatura mala.

El caso Moro: nada más patético que la transformación de sus mensajes. Aldo Moro escribe cartas pidiendo ayuda, explicando lo terrible de su situación y reclamando la negociación con sus secuestradores y futuros asesinos. La sociedad hace todo lo posible por escamotear esa noticia, que no le conviene. La sociedad necesita un héroe civil para oponerle a la bajeza de los asesinos. Cuando no consigue ocultar sus mensajes, los intoxica. Aldo Moro nunca ha podido escribir semejantes cosas. En sus cartas hay sin duda un mensaje con clave: los expertos lo buscan. Quieren encontrar palabras o signos de que lo que Aldo Moro está solicitando es que le dejen matar, porque el Estado no cede nunca. No consiguen encontrarlas, y acuden a otra manera: le han sometido a torturas psicológicas, le han lavado el cerebro. Se acumula la información histórica: como en los procesos de Moscú, como en el caso Padilla. ¿O como en los tiempos de la Inquisición, o como en los casos Rosemberg, o como en el crimen de Cuenca, cuya evocación costó al fiscal Chamorro un expediente? Podría evocarse, pero no interesa. Son los casos en que la presión era de la sociedad o, digamos, de la derecha. Lo que interesa ahora es hacer notar que los forajidos son de la izquierda, y que la izquierda tiene "técnicas". Se puede añadir que "sutiles", tal vez que "diabólicas". En realidad nada más tosco, menos sutil, que secuestrar a un hombre, maltratarle y enfrentarle con la muerte segura. En realidad, nada más humano que un hombre que pide socorro: y nada más terrible que los héroes que lo son con la vida de otro. Pero ya viene la izquierda a responder: las Brigadas Rojas son de la CIA. Son una segregación fascista o neofascista para desestabilizar. Son las derechas, como siempre.

Y ya no se sabe nada. No ha sido secuestrado Aldo Moro, no ha sido apuñalado Cubillo, sino la verdad escueta. Mientras los triunfalistas de la información clamamos por el éxito de la red de ondas herzianas, de cables, de satélites de comunicaciones que cubren el mundo para esclarecerlo, la verdad es que están ahí para intoxicarlo, para desinformar, para que nunca se sepa la realidad de los sucesos. Y para que cada uno tenga la noticia que quiere tener, aunque así no le sirva ya para nada. ■

POZUELO

podría precisarse las dos capitales, Valladolid y Burgos, tienen tendencia a expansionar su desarrollo, de acuerdo con el estudio del Banco de Bilbao sobre **Renta nacional de España y su distribución provincial**. ¿Cómo recuperar todo lo que se ha ido de estas tierras: un millón y medio de emigrantes en los últimos veinte años, el 60 por 100 de los ahorros, los productos agropecuarios infrapagados en comparación con los industriales, los

grandes excedentes de energía gratis?...

Sin embargo, las instituciones oficiales y los mismos parlamentarios apenas han levantado la voz para protestar contra la nuclearización de la cuenca del Duero que tiene como epicentro el complejo atómico de Soria, con la cual las esperanzas de un desarrollo limpio y equilibrado en base a los recursos naturales de la región se van al traste. ■ **RAUL GARCIA AGUILERA.**

Unión de periodistas

UNA ALTERNATIVA PARA LA PROFESION

EN marcha desde el mes de julio pasado, la Unión ha nacido oficialmente en el de febrero, steniéndose a la Ley de Asociaciones de 1964. Desde el principio se ha tratado de formar una asociación profesional, al servicio de la libertad de expresión, de los derechos y la ética profesional, y donde encuentren cabida todos los profesionales que realmente trabajan en el medio periodístico: periodistas gráficos o literarios, licenciados o no, con o sin carnet oficial, e incluso los todavía estudiantes de Ciencias de la Información.

Existe un reglamento provisional en donde se propugna el carácter federal de la asociación, aunque exista la colaboración natural entre otros grupos provinciales. Los miembros de la Unión pueden pertenecer o no a partidos y sindicatos democráticos, pero la organización mantendrá en todo momento su independencia. En lo laboral se hace una separación radical de aquello que atañe a los sindicatos, sin interferir en su campo de acción, pero colaborando en las cuestiones reivindicativas de la profesión, por ejemplo, en cuanto a promover la participación de los periodistas en la elaboración de la línea informativa y en la gestión democrática de los órganos de comunicación.

Preocupa especialmente en la Unión la situación de los periodistas en paro, que actualmente quedan desprotegidos, incluso aquellos que pertenecen a la Asociación de la Prensa, dado que a los pocos meses de estar en paro pierden el carnet. En este sentido se piensa reivindicar una remodelación de la "Hoja del Lunes", de modo que sus fines sean realmente ayudar a los profesionales sin trabajo, y alcanzar con ello a todo el que trabaja en el medio periodístico. Actualmente, la "Hoja" tiene poca utilidad, ya que sólo proporciona un mínimo de

asistencia y sus posibles beneficios no son fácilmente controlables por los profesionales, a quienes debería servir.

Como toda asociación en estado embrionario, el primer objetivo de la Unión es consolidarse, tener unos estatutos definitivos y sin lagunas, que perfeccionen los provisionales, elaborados por la Comisión Gestora. El funcionamiento interno de cara a esos estatutos será de carácter asambleario, para que todos los miembros intervengan en su redacción; más adelante, el trabajo se plantea como una labor de equipo, formando comisiones, encargadas de organizar todo lo que sea de interés para el asociado: asistencia jurídica, ayuda económica, perfeccionamiento profesional, etcétera.

Hasta ahora, el trabajo desarrollado por la Unión de Periodistas ha sido, a nivel nacional, en las reivindicaciones de libertad de expresión y en defensa de la profesión, cuando los casos concretos lo han requerido: huelga por "El Popus", caso "Saida", la reciente concentración por la libertad de expresión. Abundan también los contactos internacionales, tendentes a homologar la situación del periodista español con la de los colegas del resto de Europa. La Unión ha acudido al Congreso de las Organizaciones Europeas de Periodistas, en Roma, ha sido invitada al Congreso de Periodistas de Lisboa y ha conseguido un respaldo con el que hasta ahora no contaba el periodista español. Pero últimamente, el esfuerzo mayoritario se dirigió a preparar las elecciones del 13 de abril a las que concurrían dos candidaturas. Una, de concentración (la ganadora), encabezada por Francisco Sáez y Fernando Castelló; la otra, independiente, con Antonio Machín y Miguel Bayón, de la que se ha elegido a Luis G. Artime "Saco". ■ **CARMEN FERNANDEZ RUIZ.**